

RUMANÍA

COMENTARIO GENERAL

Situación política

En el mes de mayo del 2010 ha estado dedicado casi en exclusiva por los medios de comunicación al debate sobre las medidas de recorte del Gasto público anunciadas por el Gobierno de coalición liderado por el PDL.

Como resultado de la Misión de control del Fondo Monetario Internacional, tras el análisis de la situación económica efectuada por el Gobierno y el FMI y los pronósticos respecto al crecimiento económico y el incremento del déficit público, el Presidente Basescu anunció a principios de mayo la decisión de emprender un programa de austeridad sin precedentes, cuyos rasgos más destacados son la reducción del salario de los empleados públicos en un 25% y de las pensiones del sistema público en un 15%, además de otros severos recortes de los gastos sociales.

La tormenta política desatada tras el anuncio de estas medidas ha marcado de manera indeleble la trayectoria de un Gobierno de coalición que comenzó su andadura política tras la larga crisis política que paralizó al país entre septiembre y diciembre del 2009 y que quedó resuelta tras el espaldarazo obtenido en las urnas por el líder del PDL, Traian Basescu, al conseguir revalidar su mandato como Jefe del Estado. Dicha victoria le permitió romper la política de obstrucción de la mayoría parlamentaria y consolidar una coalición capaz de gobernar y acometer los retos planteados por la recuperación de la crisis económica, formada por su propio Partido (PDL) el Partido de la Minoría Húngara (UMRD) y por el grupo de parlamentarios independientes, en su mayoría provenientes de la oposición (PSD y PDL) refundados más recientemente en un nuevo partido político, la Unión Nacional para el Progreso de Rumanía.

Sin embargo, apenas transcurridos cinco meses de andadura, el nuevo gobierno ha quedado sumido en una nueva situación de incertidumbre al anunciar el programa de choque con el objetivo de contener el déficit público. No sólo las fuerzas políticas de la oposición han criticado el programa gubernamental; también las centrales sindicales con absoluta unanimidad y las asociaciones de jubilados se han lanzado a la calle en multitudinarias protestas desconocidas en este país desde los días de la Revolución de 1989. Por su parte, las asociaciones de empresarios, de profesionales, los medios de comunicación y diferentes personalidades de la Economía, han expresado sus puntos de vista criticando el programa del Gobierno. Por último, algunos parlamentarios de la propia coalición de Gobierno se han manifestado contrarios al programa de recortes, lo que coloca al ejecutivo en una situación de profunda inestabilidad e incertidumbre ante la ofensiva parlamentaria de la oposición.

Apremiado por la necesidad de ofrecer garantías al FMI para cobrar el resto del préstamo concedido por la entidad financiera internacional en marzo del 2009, que actualmente asciende a unos 8.000 millones de

euros, el Gobierno dirigió una carta de intenciones al Board del FMI, comprometiéndose a no demorar la aplicación de las medidas acordadas. A continuación, preparó dos proyectos de Ley que en lugar de someter al trámite parlamentario ordinario, decidió aprobar por el procedimiento de urgencia, asumiendo ante las Cámaras la responsabilidad política sobre ambos proyectos, lo que permite la aprobación de aquellos por Decreto. El Parlamento, a continuación, puede presentar una moción de censura que, de prosperar, provocaría la retirada de los proyectos de ley y la dimisión del Gobierno.

El PSD, secundado por el PNL, presentó efectivamente la moción de censura, que deberá ser votada el martes 15 de junio. Tras asegurarse la disciplina parlamentaria de sus diputados y senadores, PSD y PNL han calculado que necesitan 22 votos de más para sacar adelante la moción. La incertidumbre despertada por las contradictorias declaraciones de algunos parlamentarios del PDL, líder de la coalición, así como las especulaciones en torno a la posición que finalmente puedan adoptar los socios húngaros como algunos miembros de la recientemente formada UPPR, ha sido la nota dominante que ha condicionado toda suerte de especulaciones respecto al futuro de este Gobierno y de su programa de choque.

Los analistas se han esforzado en describir los posibles escenarios en que puede resolverse la presente crisis, desde una pérdida de la confianza en el Gobierno hasta un reforzamiento de la autoridad del Presidente merced a las habituales maniobras parlamentarias. Aún en el caso de que el Gobierno llegara a caer como consecuencia de la moción de censura, se especula con la posibilidad real de que el Presidente volviera a llamar a Emil Boc a formar gobierno, aunque con algunos cambios en la lista de ministros. De momento, parece que el Presidente Basescu cuenta con los elementos necesarios para sacar adelante su programa ante el Parlamento. La oposición ha clamado por un referéndum que sancione las medidas de austeridad y vuelve a reclamar un gobierno de tecnócratas, pero no parece que tenga la suficiente energía para hacerlo realidad. Además, la alianza con PNL no pasa de ser coyuntural y, sobre todo, antipresidencial. Demasiadas cosas separan a las dos formaciones, y, una de las más importantes es el concepto básico de la Fiscalidad: mientras que la única salida para el PSD está en llegar a un sistema progresivo, el PNL no quiere ni oír hablar de abandonar el actual sistema de fiscalidad unitaria.

Veamos a continuación un resumen de las medidas aprobadas por el Gobierno, que figuran en la Carta de intenciones dirigida al Board del FMI. Estas se dividen entre medidas de contención del gasto, de incremento de los ingresos y medidas adicionales.

Contención del GASTO

- Reducción de un 25% de los salarios, incentivos y demás modalidades de pago salarial para todos los empleados del sector público, excluyendo los trabajadores de las empresas estatales y a los asalariados que perciban una cantidad inferior a los 600 lei (140 euros mensuales) Esta medida equivaldría a un 1% del PIB.
- Reducción de un 15% de las rentas de las Pensiones del Sistema Público de Pensiones.

- Reducción de un 25% de las transferencias sociales para ayuda a las familias con hijos menores.
- Reducción de un 15% en las prestaciones por desempleo. Las tres últimas medidas supondrían un 1% del PIB
- Reducción de las transferencias a las entidades locales (0,3% del PIB)
- Reducción de las ayudas para calefacción central (0,3% del PIB)
- Eliminación de la Paga extra de Navidad de los empleados públicos
- Amortización de un 5% de los puestos de trabajo del Sector público a comienzos del 2011 (lo que suponen unos 70.000 puestos de trabajo)
- Nuevo cálculo de las Pensiones especiales (Pensiones que reciben los magistrados, personal de la Policía o el Ejército, etc.) que se pagan directamente con cargo al Presupuesto del Estado.

Incremento de los INGRESOS

- Ampliación de la base impositiva de los ingresos públicos, incluyendo bonos-comida, beneficios del capital y eliminando ciertas exenciones fiscales.
- Ampliación de la base de imposición fiscal de las contribuciones sociales.
- Imponer las rentas de las pensiones en una cuantía aún no determinada (Las rentas de pensiones no tributan por el Impuesto sobre la renta)
- Introducción de una tasa en el pago de servicios médicos públicos por los particulares
- Reactivación del programa de privatización de empresas públicas, sobre todo en el ámbito de la energía, la industria, el transporte, la agricultura y el turismo.

Otras medidas complementarias

- Congelación de los supuestos de Jubilación anticipada
- Optimizar el control de las Jubilaciones por discapacidad
- Reducción de 9.200 camas del sistema público de Sanidad.

- No renovar la licencia de funcionamiento a hospitales públicos considerados ineficientes (entre 200 y 400 en todo el país)
- Revisión del Código de Trabajo para aumentar la flexibilidad de la jornada laboral y reducir los costes de la contratación y el despido.

El origen de estas medidas de austeridad se encuentra en una relectura de las previsiones del crecimiento y del déficit público en Rumanía, realizadas conjuntamente por el Ejecutivo rumano y por la Misión de evaluación del FMI. Según dicha revisión, nos encontramos al parecer en un escenario peor que el previsto por los analistas a finales del 2009. Desde marzo del 2009 y con mayor intensidad desde enero del 2010, el Gobierno se ha aplicado resueltamente a llevar a la práctica el programa de medidas diseñadas para equilibrar el Presupuesto, consistentes, en medidas de contención del Gasto y reducción del Sector Público (hasta la fecha ya se ha conseguido amortizar unos 30.000 puestos de trabajo) así como medidas de reforma de carácter estructural, fundamentalmente, la Ley de reforma de las Pensiones Públicas, la de Unificación retributiva del Sector Público y la Ley de responsabilidad fiscal. Sin embargo, mientras que estas sólo pueden tener efectos a medio plazo (la ley de pensiones, aprobada recientemente, sólo podrá entrar en vigor en junio del 2011, tras aprobar las normas reglamentarias) las medidas a corto plazo se han revelado ineficaces. El problema no es tanto el tamaño del Sector público y el consiguiente gasto que ello conlleva (de hecho, no es mayor que la media de los otros estados comunitarios) sino la incapacidad de captar ingresos. La caída de los ingresos del Estado (que no han conseguido superar el 33% del Presupuesto) ha echado abajo las previsiones efectuadas hace unos meses. En consecuencia, las medidas a corto plazo se han quedado cortas.

Situación económica

En los primeros cuatro meses del año, el déficit del presupuesto general consolidado se estimó en 12.100 millones de lei, representando un 2,2% del PIB. Este dato es casi 4.000 millones de lei mayor a los 8.220 millones de lei obtenidos al final del primer trimestre. En relación al PIB esta cifra ha sido 0,35 puntos porcentuales superior en comparación con el mismo periodo del año anterior. En los primeros cuatro meses del año pasado el presupuesto tuvo un déficit de 9.350 millones de lei (un 1,8% del PIB).

Los ingresos fueron 52.600 millones de lei, un 1,2% inferiores a los del año pasado, representando el 9,8% del PIB. Los gastos sumaron 64.700 millones de lei, un 3,4% superiores comparados con los del mismo periodo del año anterior, representando el 12% del PIB.

Respecto a las previsiones para el crecimiento, el Gobierno ha acabado adoptando la prognosis del FMI que prevé un descenso del 0,5% de la economía en 2010 y el Ministerio de Finanzas rectificará el presupuesto en base a esta estimación a finales de junio o principios de julio. Según Gheorghe Gherghina, Secretario de Estado en el Ministerio de Finanzas, la última cifra recibida de la Comisión Nacional de Prognosis (CNP) es de 510.449 millones de euros para el PIB del año 2010, lo que significa un descenso del 0,5%. En abril, el Fondo Monetario Internacional revisó la previsión para este año, llevándola a 0,8% frente a la estimación

anterior, del 1,5%. Un mes más tarde los representantes del FMI afirmaron que estimaban un estancamiento de la economía o incluso un descenso del 0,5% frente a 2009.

Por último, el PIB de Rumanía a precios corrientes se estimó en 96,7 billones de lei en el primer trimestre del año 2010, siendo un 2,6% inferior en comparación con el del primer trimestre del 2009, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Desde el punto de vista de la demanda, en el primer trimestre del 2010 la demanda interna bajó un 3% en comparación con la del mismo periodo del año anterior, principalmente por la caída del 28,9% en formación bruta de capital fijo. El sector industrial fue el único sector económico que mostró un incremento de sus ingresos, aumentando en un 4,2%, hasta los 25,28 billones de lei. Los ingresos del sector de la construcción bajaron un 17,3%, hasta los 5.674 millones de lei. La agricultura, caza y pesca tuvo una leve caída (-0.9%) hasta los 2,19 billones de lei. El sector comercial, las reparaciones de vehículos, los hoteles y restaurantes, el transporte y las telecomunicaciones bajaron conjuntamente en un 2,4% hasta los 22,84 billones de lei. El sector financiero, el inmobiliario, los alquileres y los servicios a empresas cayeron en un 1,5% hasta los 18,07 billones de lei, mientras que el resto de los servicios bajaron un 2,7% hasta los 12,01 billones de lei.

Como ha dicho recientemente Adrian Vasilescu, consejero del Banco Nacional de Rumanía, el programa anunciado por el Gobierno no es un programa de medidas de austeridad económica, sino un programa de choque, que pretende limitar el déficit público en un 6,8 %, y que, de no adoptarse, podría llegar a final de año al 9%, con el resultado, además de un incremento sin precedentes de la deuda externa, que actualmente ronda ya el 37% del PIB.

Al mismo tiempo, ha defendido la necesidad de que el plan de choque descansa esencialmente en el recorte del gasto y no en la subida de impuestos. Un incremento del VAT y de otros impuestos podría disparar la inflación hasta la cota inimaginable de un 15 %, lo que convertiría a Rumanía en la “oveja negra” de la Unión Europea, la incapacitaría para conseguir ingresos para financiar el déficit, retrasaría la recuperación y podría prolongar la crisis indefinidamente.

Situación social

La oposición socialdemócrata y las centrales sindicales ven las cosas de manera muy distinta. Para los primeros, el Gobierno demócrata – liberal está condenado al fracaso en su proyecto de reducir el Sector público, porque no puede renunciar ni al modelo de estado que ha creado ni al sistema de clientelas políticas en que basa su influencia. La reducción del Sector público tiene un límite, que es el del sistema de clientelismo político que permite al PDL y al Presidente Basescu conservar los apoyos que le han hecho ganar las elecciones. Las “retribuciones” a dichos apoyos políticos se dispensan desde el partido en forma de cargos públicos y, sobre todo, el control de las agencias gubernamentales. De ahí que la desaparición de las agencias sea un objetivo imposible. La reforma del sector público no irá más allá –según los socialdemócratas- que castigar a la generalidad de los empleados, al sector más débil de la Administración, pero nunca osará cuestionar el poder de la “clientela”.

Las Centrales sindicales, por su parte, quieren que esta crisis sirva para profundizar en el debate sobre la necesidad de dar un paso adelante en el modelo de sociedad y reformar el sistema fiscal. El Bloque Nacional Sindical (BNS) ha hecho pública una propuesta que recoge los elementos fundamentales de una reforma fiscal basada en un sistema de tributación progresivo.

BNS propone implantar el impuesto progresivo y reducir las cotizaciones sociales. Los Sindicatos Nacionales de Comercio del bloque (BNS) han hecho público los resultados de una encuesta sobre el tratamiento fiscal de las rentas del trabajo en Rumanía, llevada a cabo por sus expertos, en el que establecen al mismo tiempo un sistema comparativo con otros países europeos.

En el lanzamiento del informe, Liviu Voinea, director ejecutivo del Grupo de Economía Aplicada (GEA), explicó que el 30 % de las familias tienen al menos un miembro que trabajaba como funcionario público, y que representan el 38 % del consumo privado total en Rumanía. Mientras tanto, el consumo privado representa el 60 % del PIB. Cambiar el sistema de impuesto único por un sistema de impuestos progresivos (acompañado por deducciones), duplicando el impuesto sobre el Patrimonio (al objeto de equilibrar la relación entre el impuesto sobre el trabajo y el patrimonio) y reducir de las cotizaciones sociales (CAS) son las principales recomendaciones del informe denominado " El tratamiento fiscal de las rentas del trabajo".

El informe, financiado por la UE, el Gobierno y el Fondo Social Europeo, y coordinado por Liviu Voinea, revela que el impuesto progresivo podría aportar más de 500 millones de euros al presupuesto. La reducción de la CAS en un 10 % (de 31,3 % del salario bruto - 10,5 % pagado por el empleado y el 20,5 % por el empleador) generaría un aumento de salario bruto de 2.1 a 3.4 %, según el documento. Esto permitiría crear de 68.000 a 112.000 nuevos puestos de trabajo. Otras soluciones podrían ser la reasignación de la globalización de los ingresos, duplicando el impuesto a la propiedad con vistas a equilibrar la relación entre los impuestos sobre el trabajo y la riqueza, remodelar el impuesto a la renta pagado por trabajadores autónomos en línea con el de los de por cuenta ajena.

El informe describe el actual sistema fiscal como un auténtico problema, con varias vulnerabilidades: Carece de un mecanismo eficiente de deducciones, sanciona el trabajo de los empleados que ganan sueldos pequeños, estimula la acumulación de riqueza por otros medios a los que gravan el trabajo, y mantiene sin cuestionar amplias zonas de ingresos no gravados. Además, la distribución del ingreso de Rumanía revela grandes diferencias entre las diferentes categorías de la población, por lo que sólo el 0,3 % de los empleados tienen ingresos significativos asimilados a los bonos, en torno al 0,5 % de los empleados obtienen ingresos por la prestación de servicios, oficios, profesiones liberales y los derechos de propiedad intelectual, en comparación con los empleadores, cuyos ingresos son 2,37 veces mayores que las de los trabajadores. Por otro lado, el ingreso medio equilibrado de un jubilado es tan sólo el 1,6 % mayor que la de una persona sin trabajo. Sin embargo, representa el 58 % de los ingresos de un empleado. Un total de 1 % de los pensionistas reciben los beneficios por incapacidad, un 9% está en el sistema público de pensiones porque han perdido su capacidad de trabajo y un 13 % reciben pensiones agrícolas.

Por su parte, algunos expertos han expresado su estupor y han criticado duramente el programa gubernamental por falta de realismo. Unos ven a los sindicatos llevando a gobierno a los tribunales por no cumplir la legislación existente en materia de Derecho del Trabajo, argumentando que las medidas contra la crisis son difíciles de poner en práctica desde un punto de vista jurídico. La probabilidad de éxito en los tribunales es bastante grande. No se olvide que los jueces recibirán el mismo tratamiento, perdiendo el 25 por ciento de sus salarios. Los magistrados y las asociaciones de fiscales ya han escrito al primer ministro, instando a que la ley sea derogada.

Por otra parte, el acto normativo para incluir recortes salariales tendrá que pasar, tarde o temprano, Por el parlamento. Es difícil decir quién va a estar a favor de las medidas y dispuestos a asumir el riesgo electoral que viene dado con la decisión tomada.

También hay quien ha mostrado su reserva en cuanto a la efectividad de estas medidas para cumplir con su objetivo. La razón es que, por una parte, los recortes salariales restringirán la base de imposición que llevará a obtener menos ingresos recaudados por el Estado. La reducción del salario también podría significar incremento de los despidos y más pensiones, con lo que estas medidas serán incapaces de ayudar a reducir el déficit. El desempleo es una carga extra en el mismo presupuesto y más pensiones sólo añadirán tensión a un sistema ya sobrecargado.

Por otra parte, la caída del poder adquisitivo de una parte importante de la población dará lugar a una disminución del consumo, por lo tanto, una reducción de la actividad económica.

El impacto en el sector bancario no debe tampoco desdeñarse. El número de impagos crecerá y lo hará el número de posibles clientes de los bancos que no puedan obtener un préstamo.

Por tanto, existe el riesgo de que tales medidas puedan no ser las últimas que deban tomarse. Los mismos comentaristas mencionan el riesgo de tener que aumentar los impuestos de acuerdo a los rumores iniciales, después de recortar los salarios. En un contexto internacional crítico, Rumanía tampoco podrá contar fácilmente con financiación externa.

Por lo que respecta al despido de más de 70.000 empleados públicos hasta finales del 2010, fuentes empresariales estiman que esta ola de desempleados no pueden ser absorbidos por la empresa privada. Los funcionarios despedidos en un futuro próximo tienen perspectivas sombrías de encontrar nuevos puestos de trabajo, en este momento. Una encuesta reciente del diario "Gandul" destaca el hecho de que la mayoría de los empleadores manifiestan que no necesitan "burócratas", y desconfían de los empleados del Estado - a quien acusan de estar "infectados" con una mentalidad burocrática, y además, su preocupación ahora está en cómo despedir a sus propios empleados, en lugar de contratar nuevo personal indeseado. También hay algunos empresarios que dicen que contratarían a algunos ex funcionarios, pero sólo si están dispuestos a trabajar como obreros de la construcción no cualificados "hasta que aprendan un trabajo útil." Aunque las grandes empresas que operan en Rumanía afirman que no tendrían en cuenta el origen de los

demandantes de empleo - como el productor de cemento Carpatcement - o que estarían dispuestos a contratar como guardias o para trabajos no cualificados - como el fabricante de neumáticos Continental, los empleadores rumanos han explicado con claridad que no están inclinados a contratar a los ex funcionarios públicos.

Finalmente, hay otros analistas que señalan que los cálculos del gobierno no tienen en cuenta la realidad y que no les salen las cuentas con la reducción de los salarios de los empleados públicos. El Estado, afirman, gasta cada año unos 4 millones de euros para pagar a los 260.000 funcionarios empleados de la policía, el ejército y los servicios de inteligencia. Si estos salarios se redujeron en un 30 %, el estado se ahorraría 1,2 millones de euros, es decir, 38 % de los gastos totales de personal del sector público (en euros 10,7 millones), de acuerdo a proyecciones realizadas por el periódico Ziarul Financiar ', sobre la base de cifras dadas a conocer por el Ministerio de Finanzas y el Instituto Nacional de Estadística (INS). Al comparar los dos conjuntos de datos, los analistas del diario han descubierto una diferencia de 260.000 empleados cuyos salarios son un misterio. Esto lleva a la conclusión de que uno de cada cinco funcionarios está encuadrado en la policía, la seguridad y la defensa nacional - los servicios policiales del Ministerio de Administración e Interior, los cuatro servicios secretos (SRI, SPP, SIE, STS), y los militares.

Al comparar la suma gastada por el estado para los 1,1 millones de empleados civiles (EUR 6,7 millones en 2010) con los gastos del salario total aportado por el presupuesto 2010 (10,7 millones de euros, o el 9,3 del PIB), uno puede ver fácilmente que 4 millones de euros, o 36 % de la suma, se destinarán a tan sólo 19 % del número total de funcionarios. A falta de cifras oficiales, el cálculo se verifica a través de la ratio ingreso promedio mensual devengado por este tipo especial de funcionarios. La cifra de 4 millones de euros, descontando los salarios anuales de 330 euros cada mes nos lleva a un ingreso neto medio de RON 2.700 para cada uno de estos 260.000 funcionarios "especiales". El presupuesto de sueldos para policías, militares y servicios secretos es el doble del presupuesto asignado a los sueldos de los funcionarios de la administración pública central y local, que solo gana 2,1 millones de euros al año. Aparte de este dinero, el presupuesto del Estado también debe destinar 1 euro millones al año para las pensiones de este personal "especial".

Haciendo balance e intentando comprender cómo se ha llegado a la situación actual, los medios de comunicación en sus editoriales y en las opiniones de sus colaboradores, exponen que Rumanía es la víctima de la incompetencia demostrada repetidamente por sus políticos desde 1990. Los errores añadidos a los intereses personales o de grupo, la incompetencia y el afán de servir a los intereses de la clientela política y económica, y la ignorancia del interés nacional en favor de razones estrictamente electorales, ha sido la nota predominante en la actuación política en este país.

Durante muchos meses, se ha mentido acerca de la situación de la economía rumana, de modo que los gobernantes pudieran mantenerse en el poder tras repetidas consultas electorales. Incluso los funcionarios del equipo gobernante han tenido finalmente que admitirlo. Se defienden diciendo que el gobierno anterior, encabezado por el liberal Calin Popescu Tariceanu , convirtió el rápido crecimiento económico en un fiasco,

por la forma en que gastó el dinero público, contratado más funcionarios y aumentando los salarios. Los liberales argumentan, y no sin cierta razón, recordando que con una tasa de crecimiento de un 8% sostenida durante casi diez años, ¿puede alguien culparles de haber subido los salarios y las pensiones, unos salarios y pensiones que continúan entre los más bajos de la UE? Si vamos más atrás en el tiempo, habría que culpar a los socialdemócratas de la demora inaceptable de cualquier reforma a principios de los años 90 y por patrocinar la corrupción endémica, que más tarde se ha convertido en crónica.

El futuro, a corto plazo y tal vez incluso a largo plazo estará en juego en el Parlamento el 15 de junio, el día en que se vote la moción de no confianza. El resultado es incierto. PSD propone un referéndum que permita a los rumanos dar su opinión sobre el plan del gobierno de recortar los salarios y las pensiones, además de otras medidas impopulares. No obstante, esto parece más bien una fantasía. Las duras medidas tienen que ser propuestas por el Ejecutivo y aprobadas por el Parlamento. No parece que el ciudadano tenga nada que hacer aquí.

Lo que es seguro es que Rumanía ha llegado a una situación económica crítica, y a ningún gobierno le va a ser posible sortear decisiones difíciles, como los recortes salariales, despidos o aumentos de los impuestos. Incluso si el plan de austeridad se aplicase, las autoridades todavía tendrían que pedir prestados 5 millones de euros este año para pagar los sueldos y las pensiones. Por otro lado, Europa no puede acudir en ayuda de todos, ya que varios estados de la Unión están haciendo también recortes drásticos de gastos en sus propias economías. La Unión Europea tendrá que aprobar finalmente medidas duras contra los Estados miembros cuyo déficit presupuestario sea demasiado alto. En este contexto, la solución de buscar dinero en los mercados internacionales sólo puede tener carácter temporal y de emergencia. No se puede recurrir una y otra vez al recurso de la deuda. La verdadera solución tendrá que pasar, tarde o temprano, por reducir los gastos hasta el nivel de los ingresos, porque no es posible seguir consumiendo más de lo que se produce.

La probación por el Parlamento del Plan del Gobierno significaría un genocidio - afirma la oposición y parte de los medios de comunicación - porque la gente que vive de pequeños sueldos y pensiones no podrá resistir. El plan les obligará a renunciar a medicamentos, tratamientos médicos e incluso a los alimentos más básicos. Para muchos, esto es casi una sentencia de muerte, dicen algunos.

Por otra parte, resulta curioso que la desconfianza hacia el Gobierno no se extiende al Banco Nacional, por más que las opiniones de todos ellos coincidan. Muchos medios de comunicación, a pesar de sus críticas al Ejecutivo, han reconocido que si no se confía en el gobierno, por lo menos habrá que escuchar las advertencias de los funcionarios del Banco Central. En los últimos tiempos, en muchas ocasiones, el BNR ha advertido que, sin medidas duras, se entrará en una situación de insolvencia y probablemente se compartirá el destino de Grecia, con su cadena de consecuencias - la extrema pobreza y la tragedia en todos los niveles de la sociedad.

Pero todos estos razonamientos no puede ocultar que hay algo que no puede ignorarse, y hasta cierto punto plantea una cuestión moral. Uno no puede imaginarse cómo alguien es capaz de sobrevivir con una

pensión mínima de 350 RON. No se entiende cómo se pueda sostener que haya que reducir los ingresos de quienes ganan pensiones y salarios de 100 RON. A estas personas probablemente les va a resultar casi imposible sobrevivir en los próximos meses.

Por otra parte, el Gabinete BOC no se atreve a hacer frente a los privilegios que existen en algunos "oasis" del Sector público, o lo hace sólo tangencialmente, al igual que con las pensiones que suponen miles de RON. Pero aquí es donde se alza la clientela política, en defensa de sus intereses políticos y económicos; aquí es donde ya comienza el negocio y se defienden los intereses personales por encima de todo. Esta es la razón por la que algunos salarios de miles de euros pagados por el Estado apenas se verán afectados por las reformas. Y también por eso al ciudadano común le resulta imposible aceptar la ofensiva anticrisis en su forma presentada ante al Parlamento por el Premier Boc. No se puede aceptar un gobierno que favorece a unos y castiga a otros.

¿Alguien ha considerado la posibilidad de congelar los salarios en algunos sectores privilegiados? ¿Qué hay de limitar el salario máximo en el sistema público? O poner un límite decente a pensiones "indecentes"? ¿Y qué hay de frenar drásticamente las adquisiciones públicas que favorecen a determinados contratistas y agotan el presupuesto rápidamente en esta época de crisis? Ciertamente se podría considerar todo ello, pero esto iría en contra del partido y los intereses de grupo.

La situación se ha comparado a menudo con un partido de fútbol en que el público acaba decepcionado con los jugadores en el campo y decide marcharse. Algunos emigran, otros están perdiendo toda esperanza. Los que se quedan terminarán aprendiendo, que quien ganó el partido no fueron precisamente ellos.